

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau es miembro de la ENAAT (European Network Against Arms Trade), del WRI (War Resisters International) y colaborador del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)

JULIO 2014

CENTRE DELÀS  
D'ESTUDIS  
PER LA PAU

JUSTICIA I PAU



## SUMARIO

Ni necesitamos ni queremos misiones militares en el exterior ..... 1

Libia: violencia armada e inseguridad en un estado roto ..... 2  
*Blanca Camps-Febrer*

España en Líbano: la operación "Libre Hidalgo" ... 6  
*Eduardo Melero*

La solución no es militarizar RCA ..... 8  
*Jordi Calvo Rufanges*

Balance alternativo sobre la intervención militar española en Afganistán ... 11  
*Alejandro Pozo*

## Ni necesitamos ni queremos misiones militares en el exterior

Desde que el ejército español comenzó a participar en operaciones militares en el exterior en 1989, más de 137.000 militares han sido desplegados en más de cincuenta operaciones en cuatro continentes.

Estas intervenciones militares en el exterior, desde el discurso oficial siempre han sido llamadas misiones de paz y han cumplido varios objetivos. Su funcionalidad no ha venido por la necesidad de dar respuesta a graves crisis humanitarias, la imposición o el mantenimiento de la paz, sino que lo que realmente ha determinado la elección de donde se intervenía ha sido en función de los intereses geoestratégicos del momento, ya fueran propios o los aliados, encubiertos bajo el eufemismo de unos supuestos compromisos internacionales.

A nivel más doméstico, las intervenciones han servido para afianzar la presencia de España en la esfera internacional, lo que se llama "plantar bandera", para exhibir fortaleza militar, aquello que sin pudor afirma la última Directiva de Defensa Nacional cuando afirma que la mejor contribución española a la seguridad mundial es su fortaleza militar. Internamente se han utilizado como herramienta de propaganda para legitimar las fuerzas armadas españolas, que venían de una fuerte crisis de legitimidad que desembocó en la profesionalización de los ejércitos y en una posterior crisis del reclutamiento de efectivos.

Ahora, la actual crisis económica ha añadido otra funcionalidad a las intervenciones militares en (pág. 2 ►)

(► pág. 1) el exterior. La crisis económica no ha llevado a un replanteamiento de la política de defensa que comportara abandonar un modelo de ejército sobredimensionado, reducir de manera significativa sus efectivos y recortar de manera drástica el gasto militar. Los ajustes presupuestarios, menores que los que ha sufrido el gasto social, se han repartido por una parte en ingeniería financiera para ocultar gastos de rearme, trasladándolos hacia el futuro; y por otra parte, en limitar al máximo los gastos de mantenimiento ordinario, de reducir los ranchos, de ahorrar en munición, haciendo que en la práctica hayan quedado prácticamente a cero las partidas presupuestarias destinadas a pagar las maniobras, el combustible o la munición, es decir, todo lo que garantiza que el ejército sea operativo. Así, el Estado Mayor de la Defensa ha tenido que elaborar y dar prioridad a los planes para poder garantizar que un pequeño núcleo del 10% del ejército esté operativo. Tal como declaró el ministro Morénés "vale más tener un 10% al 100%, que un 100% al 10%".

Las misiones en el exterior han venido ahora a ser una tabla de salvamento para tener un mínimo de unidades en condiciones operativas. Son las unidades que participan en las misiones en el exterior las que pueden recibir entrenamiento intensivo, las que ven completadas sus plantillas y las que tienen cubiertos todos sus equipamientos. Todo ello gracias a que los recursos para hacerlo no provienen de los presupuestos ordinarios sino de la partida ampliable destinada a que llaman con el eufemismo de "misiones de paz". Partida ampliable que siempre se amplía, desde los 14 millones iniciales hasta los 800 de media de los últimos años.

Basta de engaños, ni necesitamos mantener un ejército sobredimensionado con unas armas que no se necesitan, compradas con un dinero que no tenemos, ni las intervenciones exteriores son misiones de paz como se empeñan en llamarlas. Hay que anular las operaciones militares en el exterior y reducir significativamente los efectivos militares actuales y adecuarlos a las necesidades reales de seguridad.

## Libia: violencia armada e inseguridad en un estado roto

La revuelta contra el régimen de Qaddafi pareció alcanzar su objetivo en octubre de 2011. Con la ayuda de una coalición de 18 países y una flexible interpretación de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad, el llamado estado de masas cayó tras el asesinato del dictador cerca de Sirte. Pero la era post-Qaddafi ha comportado inseguridad y violencia generalizadas en el país y las iniciativas desde dentro y fuera del país para pararlo no parecen por ahora tener éxito.

Tres son los factores claves que están determinando el panorama actual de la Libia post-Qaddafi:

- Debilidad institucional y estructural
- Resurgimiento de conflictos locales y regionales
- Proliferación de armas y fragmentación de la violencia armada

### Debilidad institucional

Al derrumbarse el régimen de Qaddafi, la sui generis estructura del estado se derrumbó con él. Las nuevas instituciones, después de tres años

con una hoja de ruta poco clara, siguen sin afianzarse. La guerra de facciones se traduce en la rivalidad de las mismas instituciones creadas, que compiten entre sí, tanto en el propio Congreso Nacional General como en el gobierno, donde varios ministerios, liderados por hombres fuertes tienen el control de sus propias milicias.

El Congreso Nacional General gobierna de facto el país con caóticos equilibrios y sin haber podido aprobar su propio reglamento interno. Las desavenencias programáticas, y en especial en políticas económicas, son tan sólo la punta de lanza de una lucha férrea por el poder.

El país aplica la receta estadounidense de construcción institucional que instaura una democracia formal sin que las condiciones que generan la inseguridad sean dirigidas de manera coherente. A mediados de verano, por ejemplo, están previstas elecciones legislativas, pero el clima actual hace difícil imaginar una organización transparente y libre de las votaciones.

La debilidad institucional enquistada la posibilidad de un proceso de construcción de paz, inviable



sin garantizar la seguridad ciudadana y el acceso de la población a los servicios básicos, entre ellos un sistema legal funcional, con garantías jurídicas y que evite la “justicia del vencedor”.

## Resurgimiento de conflictos locales y regionales

Durante 42 años, Qaddafi gestionó el país con la estrategia de “divide y vencerás”, aliándose y enemistándose tribus y poblaciones enteras para mantener un estrecho control del poder. Esto comportó enriquecimientos y discriminación de unas y de otras poblaciones que el fin de la dictadura aún no ha conseguido solucionar. Las reservas de petróleo de Libia son las mayores de toda África, pero algunas facciones regionales consideran que las ventajas de este oro negro no llegan a toda la sociedad por igual.

El conflicto se ha intensificado aún más con las huelgas y bloqueos a puertos y centrales petrolíferas de la región, que han hecho descender las exportaciones libias hasta una quinta parte de la cantidad de inicios de año. Desde julio de 2013, tres puertos de la zona oriental se encuentran paralizados debido a los bloqueos de milicias y de la llamada Oficina Política de la Cirenaica. En marzo del 2014, un barco con bandera norcoreana transportando 234.000 ba-

riles de petróleo (por valor de unos 3 millones de dólares) de la Compañía Nacional de Petróleo de Libia, salió del puerto de Sidra, supuestamente en dirección a Corea del Norte. El barco pretendía evadir el bloqueo impuesto por Trípoli y hacer realidad para los orientales el eslogan del ministerio de Petróleo “El petróleo es nuestra fuerza”. Pero la marina de los Estados Unidos re-capturó la nave en aguas internacionales. Este incidente, por otra parte, provocó la caída del primer ministro Ali Zeidan que, acusado también de malversación, ha huido a Alemania.

También en el sur del país y desde febrero, varias protestas bloquean los campos petroleros de AlSharara y otras instalaciones de extracción o de canalización petrolífera.

La revolución de febrero de 2011 no se inició en Benghazi por casualidad. Las tribus y poblaciones de la región oriental del país, conocida históricamente como Cirenaica o Barqa, se habían sentido siempre discriminadas y la era post-revolución no ha satisfecho ni mucho menos sus demandas. Así, la falta de compensación e inversión económica en la región se ha canalizado a través de demandas federalistas y en algunos casos de independencia. Sobre el terreno, esto se traduce en milicias como la Brigada de los Mártires del 17 de Febrero, de corte islamis-



ta (la más grande y equipada, con unos 12 batallones), la Brigada de Rafallah As-Sahat (1000 combatientes) o Ansar Ash-Sharia. Esta última, de ideología salafista radical, ha sido señalada como responsable del asesinato del embajador de Estados Unidos en Benghazi Christopher Stevens, de la destrucción de mausoleos sufíes centenarios y de graves violaciones de derechos humanos.

Pero estas brigadas no son las únicas que intentan imponer su ley. El hundimiento del aparato estatal de Qaddafi, y con él de las fuerzas armadas del país, ha provocado la inseguridad y falta de servicios públicos y un vacío de poder que algunos de los líderes locales y milicias han sustituido con su propia gestión y control armado.

### **Proliferación de armas y fragmentación de la violencia armada**

Hasta la caída del dictador, Libia era el país del Norte de África con un mayor número de fuerzas armadas en relación a la población, con 12 militares por cada mil habitantes. Tras el fin de buena parte de las sanciones al país en 2003 y la progresiva reintegración del régimen de Qaddafi en la comunidad internacional, la importación de armas también aumentó expo-

nencialmente. El gasto militar ha aumentado aún más desde la caída de Qaddafi, en un 209% si lo comparamos con datos de 2008. La UE es el primer exportador de armas a Libia, y entre ellos de 2003 a 2011 España exportó por un valor de 15 millones de euros armamento y otros materiales, incluidas bombas de racimo. Todos estos materiales fueron posteriormente usados para reprimir la revuelta de 2011 y los arsenales han ido a parar a grupos armados de todos los bandos en Libia, en otros puntos calientes del Sahel e incluso en Siria.

Evidencia de esto es el conflicto en Mali en la que participaron ex combatientes pro-qaddafistas o simplemente ex-militares africanos expulsados por la guerra y por el fin del régimen que los alimentaba.

La proliferación de armas y la militarización de Libia han tenido un impacto directo en el estado actual en que se encuentra el país, ya que magnifican las causas de inestabilidad.

### **Alguien tiene un plan para el futuro de Libia?**

A pesar de los problemas estructurales que asolan el país, los esfuerzos para la construcción de





paz parecen priorizar la seguridad a través de la militarización del estado por delante de una reconstrucción institucional coherente y de un programa de desarme, desmovilización y reintegración con resultados.

De momento, el único plan que se está llevando a cabo, con la tutela de los Estados Unidos, es la creación de la Fuerza de Propósito General (General Purpose Force o GPF). La GPF surge como estrategia para sustituir la Libya Shield Force (LSF), comprometida, como la mayoría de grupos y brigadas, por faccionalismo interno. La LSF se estableció en 2012 con el objetivo de integrar diversas milicias rebeldes bajo el mando del Ministerio de Defensa. En el último año sin embargo, han protagonizado enfrentamientos con otras unidades gubernamentales en todo el país.

El objetivo manifiesto de la General Purpose Force es desactivar este desmembramiento amalgamando la mayoría de grupos y combatientes activos bajo una sola fuerza estatal. Los EEUU ya se han comprometido a entrenar entre 5.000 y 8.000 soldados en los próximos 7 años. El Reino Unido, Italia, Turquía o Marruecos entre otros, también participarán en el programa. De hecho, EEUU ya ha enviado el primer contingente de militares que preparan las formaciones y que ayudarán a filtrar los participantes que se integrarán en las nuevas fuerzas armadas.

Las formaciones tendrán lugar en Bulgaria en grupos en rotación. Uno de los emplazamientos concebidos originariamente por EEUU para realizar estos entrenamientos había sido las Islas Canarias, pero de momento la idea parece haber sido descartada en favor de la búlgara Novo Sale. Excepto estas informaciones sobre el lugar de entrenamiento, no parece que España participe activamente en la creación de la GPF.

Los EEUU, que en octubre pasado invadieron territorio libio en una operación unilateral para detener a un supuesto líder de AlQaeda, parecen estar muy interesados en estabilizar el país a golpe de militar, a pesar de las evidentes consecuencias negativas que hasta ahora ha tenido que pagar el país y la región. La receta: combatir la violencia armada con un 'propósito general' confuso y desligado de los programas de desarme, de reducción de la violencia y de desarrollo.

Según el especialista Albert Caramés, los programas de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) pueden perseguir tres objetivos en un contexto post-bélico: el desarme total, la desmilitarización parcial o la continuación de la lógica militarista. En el caso de Libia, el objetivo prioritario sería conseguir una desmilitarización parcial, que es lo que Caramés considera un programa típico de DDR:

"... [C]omportaría el desarme y desmovilización de todos o casi todos los combatientes de un bando y una reducción considerable del tamaño de los otros (que conforma el núcleo de las futuras fuerzas armadas). Las armas excedentes se destruyen y los soldados que no son indispensables se reintegran a la vida civil: el resultado es un desarme y una desmilitarización auténticos aunque parciales en términos globales, y un reestablecimiento del control unificado sobre las armas y los soldados".

Para los ex-combatientes, una reintegración centrada en la comunidad es esencial en un conflicto que moviliza grupos armados locales en torno a problemas locales.

Pero los planes del estado libio y de sus aliados parecen apuntar hacia otro lado. En medio de esta fragmentación de grupos armados y de luchas de poder, en marzo el gobierno libio declaró como prioridad la "guerra contra el terrorismo" y pidió ayuda explícita a la comunidad internacional y a Naciones Unidas. El control y legitimidad de esta lucha contra el terrorismo ya está provocando, sin embargo, más enfrentamientos y debilidad en Benghazi, donde el 18 de mayo pasado se proclamaba de nuevo una zona de exclusión aérea.

La reducción de la violencia es urgente para evitar una rotura casi consumada de Libia y para frenar la espiral de violencia actual. La situación exige un enfoque a la vez global y local. Un enfoque estrictamente securitario no podrá solucionar la inestabilidad de un país en el que las raíces del conflicto son demasiado profundas, desde la incapacidad del estado para proveer seguridad y servicios básicos hasta la discriminación y desigualdad socioeconómica en el territorio.

## España en Líbano: la operación “Libre Hidalgo”

La intervención militar española en Líbano puede explicarse como un intento del Gobierno de mejorar el prestigio internacional de España. La participación se produce a partir de 2006, con la ampliación de funciones de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL según sus siglas en inglés) que llevó a cabo la Resolución del Consejo de Seguridad 1701, de 11 de agosto de 2006. Su origen se encuentra en el conflicto entre Israel y Líbano. En julio de 2006, Hezbollah llevó a cabo una incursión en territorio israelí, causando la muerte de ocho soldados israelíes y la captura de otros dos. Como respuesta, Israel bombardeó el sur de Líbano durante 34 días, causando más de mil cien muertos y enormes daños materiales.

En cuanto al componente militar, las tareas básicas que lleva a cabo el contingente español son vigilar la zona de separación entre Líbano e Israel, la llamada Línea Azul. También ha llevado a cabo tareas de desminado y desactivación de explosivos. El ejército español formó parte de la fuerza marítima de UNIFIL entre junio de 2008 y febrero de 2009, cuya finalidad es vigilar las aguas territoriales libanesas para evitar la entrada de armas y mercancías ilegales.

Paralelamente, se ha pretendido dotar de una dimensión humanitaria a la misión, a través de la denominada «cooperación cívico-militar». Más que ayudar realmente a la población, lo que se pretende es utilizarlo como un instrumento que facilite la operación militar. Así, según el libro *Misión: Líbano*, publicado por el Ministerio de Defensa en 2013: «Se procura obtener para la Fuerza el apoyo de la población e involucrar a las autoridades locales para crear un ambiente adecuado para la labor que desarrolla la misión FINUL». Se dedican anualmente 500.000 euros a proyectos de impacto rápido, lo que supone apenas el 0,3 % del presupuesto que ha gastado el Ministerio de Defensa en la operación. Se realizan proyectos con visibilidad muy alta; pero como señala el libro citado «Es necesario eludir proyectos que impliquen compromisos posteriores de mantenimiento o reposición que supongan una obligación permanente». Prima, por tanto, la finalidad propagandística frente a las necesidades de la población. En este apartado hay que tener en cuenta también el «Programa Cervantes», en el que los militares imparten cla-

ses de español a la población. Se han llegado a impartir 50 clases semanales, en 14 centros de 9 localidades con 220 alumnos.

Es la primera vez que un militar español ejerció el mando como jefe de la misión y comandante de la fuerza de una operación de cascos azules. Cargo que le correspondió al general de división Alberto Asarta Cuevas, entre enero de 2010 y enero de 2012. También ostentó el cargo de director de la Célula Militar Estratégica para FINUL, en Nueva York, el general de división español Ángel Guinea Cabezas de Herrera entre mayo de 2008 y junio de 2009.

El envío de tropas, hasta un máximo de 1.100 militares fue autorizado el 7 de septiembre de 2006 por el Congreso de los Diputados: votaron a favor 306 diputados y dos se abstuvieron. Cuatro fueron los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar el envío de tropas: 1) contribuir a la consolidación de la paz y el respeto de los derechos humanos, a través de una vía complementaria a la política y diplomática; 2) el interés estratégico de España en la región de Oriente próximo; 3) razones de seguridad, —el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, llegó a afirmar que la crisis del Líbano «involucra a toda la región, una zona del planeta cuya estabilidad es esencial para la seguridad de sus habitantes pero también para la seguridad del resto del mundo»—; 4) otra de las justificaciones se relacionaba con razones de prestigio internacional, «el peso específico de España en el ámbito internacional».

Entre los años 2006 y 2012, el contingente español estaba compuesto por poco más de mil efectivos (así, por ejemplo, en diciembre de 2010 estaban en Líbano 1.074 militares españoles). En 2012 se produjo una importante reducción de la presencia española. A finales de dicho año había 640 soldados. A fecha de 27 de mayo de 2014, participan en UNIFIL 589 militares españoles de un contingente total de 10.247 efectivos. De esta forma, España ha pasado a ser el octavo país en número de tropas [1] Indonesia: 1287; 2) Italia: 1089; 3) India: 896; 4) Nepal: 869; 5) Ghana: 867; 6) Francia: 838; 7) Malasia: 829; y 8) España: 589. La reducción del contingente español se ha justificado en un cambio de estrategia por parte



mcb.es

de la ONU. Aunque, a mi juicio, demuestra que el Gobierno ha considerado que ya ha cumplido los objetivos de mejora de la imagen internacional de España, dando por amortizada la misión. La reducción de efectivos también se explica por la política de recortes, ya que ha supuesto un ahorro de entre 20 a 40 millones de euros anuales. El margen de decisión política del Gobierno español era mayor en este caso, ya que la participación española no se realizó ni en el marco de la OTAN ni en el de la Unión Europea.

Desde el inicio de la misión han fallecido doce soldados: seis de ellos en 2007 por la explosión de una mina, tres por cuestiones de salud, dos por accidentes con los vehículos blindados, y uno por una caída fortuita.

La operación en el Líbano es la peor valorada por la opinión pública. Según el Barómetro del Real Instituto Elcano de febrero de 2013, un 39,1% de los encuestados señalaron una valoración positiva (muy positiva el 4,4 % y positiva el 34,7 %), mientras que el 36,7% de los encuestados manifestaron una valoración negativa (muy negativa el 4,8% y negativa el 31,9%). De esta forma se pone de manifiesto que el Congreso de los Diputados no representa a la opinión pública en este tema.

En definitiva, la participación militar española en Líbano pone de manifiesto que se utilizan las operaciones en el exterior como un instrumento de política nacional. En este caso, para mejorar la imagen internacional de España. Otro elemento a tener en cuenta es que con estas operaciones se pone a prueba la «capacidad expedicionaria» del ejército español. Recordemos el desembarco de los militares españoles en la playa de Tiro en 2006.

**Tabla 1: Coste económico de la operación Libre Hidalgo** (millones de euros)

TOTAL	1.314
2006	60,3
2007	215,4
2008	177,4
2009	165,4
2010	173,1
2011	196,4
2012	173,8
2013	151,9

Fuente: elaboración propia

Eduardo Melero



## La solución no es militarizar RCA\*

RCA es un país donde cuatro de los cinco presidentes han sido depuestos por un golpe de estado, donde existen 551.600 desplazados internos, cerca de la mitad solo en la capital Bangui, incluyendo a 70.000 viviendo en miserables condiciones en el aeropuerto de la ciudad, y donde además 341.600 se han refugiado en las vecinas Camerún, Chad, República Democrática del Congo y República del Congo. RCA ha

y venganzas, en la que la utilización de las diferencias identitarias ha llevado a una elevada polarización entre cristianos y musulmanes y al distanciamiento entre grupos étnicos. A ello hay que sumarle la desconfianza existente anteriormente, entre sedentarios y nómadas, una de las razones que con más acierto puede explicar las raíces de una parte de la violencia inicialmente de baja intensidad que hoy se ha generalizado en todo



sido y es un país que se encuentra en una crisis humanitaria y política permanente, que ha visto agravada su situación por enésima vez.

La reciente irrupción de Seleka, un grupo armado que puede contar con entre 5000 y 7000 efectivos principalmente con origen en el noreste del país, compuesto por chadianos y sudaneses, y su posterior llegada al poder el 24 de marzo de 2013, junto a la revuelta de los grupos anti-Balaka (anti-machete), compuestos por milicias rebeldes y otros grupos anti-Seleka, y que incluye entre sus miembros ex-militares de las Fuerzas Armadas Centro Africanas (FACA), ha sumido a RCA en una situación de violencia generalizada

el país. El resto es lo de siempre, una baile de siglas de grupos armados cuyos líderes buscan su parte del pastel en los procesos de reparto de poder tras demasiados años de conflicto armado de mayor o menor intensidad y cuyos soldados tienen pocas alternativas a la lucha armada. Una eterna inestabilidad política, económica y las recurrentes crisis humanitarias que han azotado el país se han encargado de que RCA pase de ser un estado considerado frágil a uno fallido, en el que la Comunidad Internacional ha decidido actuar, como siempre, tarde y por la vía militar.

Ahora, en poco más de un año el gobierno ha cambiado tres veces de manos. El Acuerdo de



Paz de Libreville de enero de 2013 fue incumplido por Seleka, que tras colocar a su líder Michel Djotodia como autoproclamado presidente, fracasó por los abusos de los ex-Seleka y la irrupción de los grupos de autodefensa anti-Balaka que extendieron la violencia hasta la capital. Ello llevó a la dimisión de Djotodia a principios de 2014 y a la llegada al poder como presidenta interina de Catherine Samba-Panza, con el objetivo de estabilizar el país y organizar a toda prisa unas previsiblemente poco democráticas elecciones en 2015.

La Comunidad Internacional ha respondido en RCA con varias dosis de militarismo. La MICO-PAX (antes FOMUC) era la Misión de consolidación de la Paz en República Centroafricana impulsada por la Comunidad de Estados de África Central (ECCAS, Economic Community of Central African States), empezó el 4 de diciembre de 2002, y con 700 efectivos militares de Camerún, Chad, RDC, y Gabón, 30 observadores militares (de Burundi, Camerún, Chad, República de Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón, y 150 policías (de Guinea Ecuatorial) –financiados por la UE, Francia y ECCAS–, fue incapaz de detener el avance de Seleka hacia la capital Bangui. A partir de entonces, la presión francesa para aumentar la capacidad militar de la intervención extranjera llevó a que en julio de 2013, llegara la resolución 2127 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que impulsó la creación de la MISCA (Misión de Apoyo a Centroáfrica) de la Unión Africana, en sustitución de la ineficiente MICO-PAX. La MISCA fue dotada con 6000 militares y policías de diversos estados de África Central, desplegada bajo instancias de la Unión Africana. Esta misión es financiada en su totalidad por la UE. En febrero de 2014, la MISCA contaba con 6032 militares.

Por otro lado, y de forma paralela, el ejército francés siempre ha estado presente en RCA, sobre todo en la capital. Pero su intervención militar actual, que ya cuenta con 2000 soldados, ha supuesto un salto cualitativo en su implicación en el conflicto centroafricano. A través de la operación Sangaris desplegada a partir del 5 de diciembre del mismo año por la misma resolución 2127 del Consejo de Seguridad, para dar apoyo a la MISCA. A esto hay que sumar la amplia presencia militar francesa en el Sahel, en Chad con la operación Epervier (950 efectivos), en Mali (1600) en la Operación Serval y 100 efectivos en la EUTM. Además, la apuesta de la Unión Europea (UE) por la estabilización

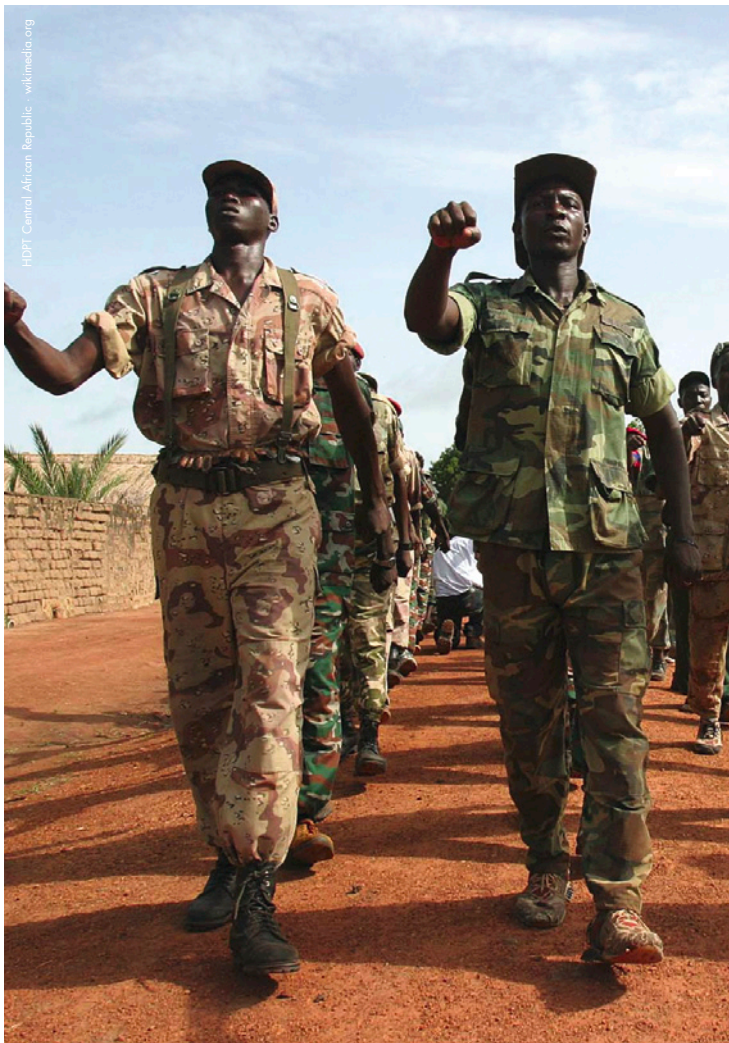
**Tabla 1. Situación humanitaria en RCA**

Datos generales	
Índice de desarrollo humano	180. Bajo
Esperanza de vida	48 años
PIB per cápita	789 \$
Mortalidad infantil/1000	105,38
Analfabetismo	49,00%
Afectados por VIH	13,50%
Refugiados	341600
Desplazados internos	551600
Personas en riesgo de inseguridad alimentaria	1,7 millones
Población que necesita asistencia	2,5 millones
Desnutrición aguda	11,90%
Niños afectados por la crisis	2,3 millones
Niños que se quedarán sin educación por el conflicto	150.000
Personas que necesitan un refugio con urgencia	703.975
Niños con malnutrición severa	28.000

Fuente: PNUD (2013) Índice de Desarrollo Humano, <https://data.undp.org/dataset/>; OCHA (2014), Central African Republic Situation Report No. 32 [reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20CAR%20Situation%20Report%20No%2032\\_140701\\_final.pdf](http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20CAR%20Situation%20Report%20No%2032_140701_final.pdf); Jiménez Olmos (2014) El Conflicto en la República Centroafricana, Revista de Aeronáutica y astronáutica <http://www.seipaz.org/documentos/436-447%20CENTROAFRICANA-2.pdf>

a través de la vía militar de RCA ha tenido otros pilares, las intervenciones militares europeas desplegadas en la zona han sido principalmente dos: la EUFOR Chad/RCA, de 2007 a 2009, y la actual misión desplegada en el área de Bangui, la misión EUFOR-RCA, sustentada en la resolución 2134 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

A la Operación Sangaris del ejército francés hay que sumar un contingente de la UE de 1000 efectivos, que comienza a desplegarse en el segundo trimestre de 2014. En este contingente, participa España, desde que, previa solicitud de las autoridades francesas, el Consejo de Ministros del 13 de diciembre de 2013 aprobó contribuir con un avión T-10 'Hércules' y un contingente de apoyo hasta un máximo de 60 efectivos militares, para facilitar el despliegue y sostenimiento de las fuerzas francesas en RCA, inicialmente mediante el apoyo aéreo desde España y, en caso necesario, desde bases francesas en Gabón o Chad. El despliegue del destacamento 'Mamba' en Libreville (Gabón) comenzó el 21 marzo de 2014. Un contingente



HDPF Central African Republic - wikimedia.org

español integrado por 50 componentes de Operaciones Especiales y un grupo de 25 efectivos de la Guardia Civil llegaron el 28 de mayo a Bangui, mientras otros 10 militares españoles ya se encuentran desplegados en los cuarteles generales instalados en Larissa (Grecia) y en Bangui. Este contingente permanecerá durante un periodo inicial de seis meses en RCA y su misión será la de colaborar en el restablecimiento de la seguridad en la capital del país y sus alrededores, zona en donde sustituirán a las fuerzas francesas de la operación 'Sangaris' y a las fuerzas internacionales MISCA de la Unión Africana y así favorecer operaciones de estas fuera de la capital.

Recientemente, el Consejo de Seguridad ha adoptado una resolución por la que establece una nueva misión en RCA, la MINUSCA por un periodo inicial que llegará al 30 de abril de 2015, e integrará la oficina integrada de Peacebuilding de NNUU en RCA (BINUCA) existente desde 2009. El 15 de de septiembre se espera que la MINUSCA cuente con 10000 militares, incluyendo 240 observadores militares, 200 des-

tinados a administración; y 1800 policías. Esta misión actuará bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. La transferencia de autoridad de la MISCA a la MINUSCA deberá realizarse también el 15 de septiembre. Otras consideraciones de la resolución autorizan a las Fuerzas Francesas a utilizar todos los medios necesarios para dar apoyo a la MINUSCA.

Llegados a este punto nos tenemos que preguntar: ¿Ha ayudado una larga y relativamente numerosa presencia militar internacional a la población del país? La respuesta es no. Si observamos los datos sobre la situación humanitaria en el país (tabla 1) podemos comprobar que el caso de RCA es otro más en la larga lista de despropósitos de la Comunidad Internacional, que actúa tarde y mal, invirtiendo ingentes sumas de dinero, por la vía militar para hacer frente a una violencia previsible y esperable, que buena falta hacen en aspectos humanitarios y de desarrollo. Porque, ¿acaso no sabían en Naciones Unidas, Francia o España, –que va de la mano de su vecino del norte–, que la situación en RCA era insostenible, que ya son décadas en las que su población vive

en la miseria y en el mayor ostracismo por parte de la Comunidad Internacional? La Oficina para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en RCA estima en 2,5 millones la población con necesidades, más de la mitad del total. Organizaciones humanitarias que trabajan desde hace ya largo tiempo en el país prácticamente solas, como Médicos Sin Fronteras, vienen alertando de esta situación desde mucho antes de que estallara la violencia a niveles suficientes para aparecer en los medios de comunicación occidentales. Es cierto que hay que desarmar el país, es cierto que hace falta un proceso de democratización, pero sobre todo, lo que necesita RCA es una apuesta decidida por parte de la Comunidad Internacional para revertir una crónica crisis humanitaria que ofrezca una alternativa de desarrollo y paz a su población, no más armas ni más militares.

*Jordi Calvo Rufanges*

*\*El autor agradece a Ainhoa Ruíz su inestimable ayuda en la realización de este artículo*



# Balance alternativo sobre la intervención militar española en Afganistán



Con el año 2014 finalizará la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), la operación militar liderada desde agosto de 2003 por la OTAN, a la que ha contribuido España desde sus inicios en diciembre de 2001. Es por ello un buen momento para realizar un breve balance de la misión más costosa de la historia del intervencionismo militar español, tanto en términos humanos como económicos. Hasta 2013, el propio Ministerio de Defensa de España declaró haber gastado en la ISAF más de 3.500 millones de euros, a los que cabe añadir al menos otros 197,8 millones de euros de la participación española en la operación paralela Libertad Duradera entre octubre de 2001 y julio de 2004 (EE UU habría destinado a la “guerra en Afganistán” –es decir, ambas misiones– hasta marzo de 2014 unos 553.000 millones de euros, según el *National Priorities Project*). Por otro lado, cien personas vinculadas al Ejército español han perdido la vida (96 militares, dos guardias civiles y dos intérpretes), de los que al menos 81 perecieron en accidente de transporte. Cabría sumar un número indeterminado y no declarado de muertos afganos por las acciones de los efectivos españoles en este escenario de guerra.

Sigue una serie de diez puntos que proporcionan, a modo de balance crítico de la participación española, un análisis alternativo de la versión oficial contenida en la página web del Ministerio de Defensa:

- 1) Los inicios militares de España en Afganistán fueron contrarios a Derecho.** Dejémoslo claro desde el principio: Libertad Duradera no fue ni es una operación legal. Es bien conocido que el Derecho Internacional únicamente avala el uso de la fuerza contra un Estado en dos supuestos: que exista una autorización expresa del Consejo de Seguridad o que pueda invocarse el derecho de defensa contenido en el artículo 51 de la Carta de la ONU (que también fija sus criterios, no aplicables en el caso que nos ocupa). Paradójicamente, tanto José María Aznar como José Luis Rodríguez Zapatero justificaron la intervención como legítima defensa (y allí siguen, *defendiéndose*). Por el contrario, el Gobierno respondió a una pregunta parlamentaria que la decisión se apoyó en la resolución 1.368 que, si alguien estima conveniente leer, podrá comprobar que no se mencionan, ni una sola vez, las palabras “al Qaeda” ni “talibán”, ni siquiera “Afganistán”.

- 2) Libertad Duradera y la ISAF pueden ser consideradas una misma intervención.** Sobre el papel, sin duda se trata de misiones diferentes (de hecho, la segunda sí está autorizada por una resolución expresa de la ONU). Cabe, sin embargo, destacar al menos tres razones que hacen sospechar a quien suscribe que se trataría más bien de dos filos de una misma espada: la primera, quien así lo sostiene es Estados Unidos, cuyos soldados representan la práctica totalidad de Libertad Duradera y la mayoría de las fuerzas de la ISAF. Ni sus políticos, ni sus militares ni su opinión pública en general diferencian expresamente entre ambas operaciones, al menos no en la lógica, las motivaciones ni en la esencia de la intervención. De hecho, tampoco se separan las partidas presupuestarias. En segundo lugar, las dos coexisten y se solapan en el terreno, colaboran permanentemente, intercambian información y tareas, y comparten incursiones. Finalmente, el mango de la espada ha sido sostenido, al menos entre 2007 y 2014, por exactamente la misma persona: los cinco últimos máximos comandantes de la ISAF, los generales estadounidenses McKiernan, McChrystal, Petraeus, Allen y el actual dirigente, Joseph F. Dunford Jr., han sido, al mismo tiempo, los máximos responsables militares de las fuerzas de EE UU en Afganistán (USFOR-A, en el que se integra Libertad Duradera).
- 3) La involucración española en Afganistán ha sido en extremo militar.** Al menos 92 de cada 100 euros destinados por España a Afganistán han sido estrictamente militares, para financiar las operaciones ISAF y Libertad Duradera. Sucede además que los ocho euros restantes tendrían una lógica, reconocida por el estamento militar, de mejora de la aceptación de la población local y de facilitación de la presencia militar y su seguridad. Por eso, la ayuda se proporcionó en los mismos lugares en los que se desplegaron los soldados y estos participaron directamente en muchos de los proyectos. En España, esos proyectos han contribuido a justificar políticamente la presencia militar en Afganistán, en vista de lo contenido en los diarios de sesiones en el Congreso de Diputados.
- 4) Ni terrorismo, ni opio, ni mujeres: la motivación primaria de la involucración española tiene que ver con su política de alianzas.** Madrid no quiere ser totalmente independiente para decidir dónde enviar a sus soldados y
- dónde no. Su política exterior está subordinada a la OTAN y debe cumplir con ella si quiere seguir gozando de los privilegios que supone formar parte del *club* y evitar enfados de sus socios, que son tan aliados como competidores. Al hacer *los deberes* en Afganistán, por ejemplo, amplía sus opciones en cumbres internacionales de todo tipo. España ha defendido el fin de la ISAF entonando un "misión cumplida", pero considerando que la práctica totalidad de los problemas que justificaron la intervención en 2001 continúan presentes, cabe suponer que el objetivo, como se ha aventurado, era otro. Conviene recordar aquí al antiguo ministro de Defensa, Julián García Vargas quien, en relación al riesgo de que fracasara la misión militar de la ONU en Bosnia, concluyó que: "lamentablemente, estos riesgos se han confirmado, aunque el balance para España es positivo".
- 5) La amenaza terrorista es hoy mucho más patente que antes,** tanto para los afganos como para el resto del mundo. Antes de la atrocidad del 11-S, no existía ningún registro de atentado suicida en Afganistán, ni los afganos temían perecer al ir a comprar al mercado. A escala global, también ha sido este el caso de países como Indonesia, Uzbekistán, Túnez, Marruecos o, muy significativo, Irak. Además, Afganistán fue el pistoletazo de salida para una serie de desmanes relacionados en Irak, Guantánamo, Somalia, Yemen o Pakistán, entre otros. Grupos como ISIS o los diferentes usos oportunistas de la marca Al Qaeda en diversos lugares del planeta también tienen que ver, efectivamente, con la Guerra Global contra el Terror inaugurada en Afganistán. Así, al comparar el mundo de hoy con el de hace trece años no podemos sino concluir que es un lugar más peligroso, en particular para los musulmanes del Próximo Oriente.
- 6) Se respondió a la injerencia extranjera... con más injerencia.** Este ha sido, probablemente, el mayor de los problemas de Afganistán en más de tres décadas. La lista de países de infame intrusión es larga: Pakistán, Irán, la Unión Soviética y Rusia, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, India, China, Uzbekistán o Estados Unidos, entre otros. Tras la intervención estadounidense y el derrocamiento del régimen talibán, los distintos países continuaron buscando la satisfacción de sus intereses a través de grandes milicias





Photo: Johnny Bivara, USN - dadmedia.esa.mil

afganas afines. En efecto, estos grupos armados necesitan mucho dinero, facilidades y connivencias para conseguirlo por su cuenta y cobertura política y militar. Sin estos apoyos, los desastres de la guerra hubiesen sido mucho más limitados. Por el contrario, si los padrinos lo exigen, las milicias se sientan a la mesa de negociaciones. Conviene, por tanto, preguntarse cuál ha sido el rol de España en el terreno diplomático, cuáles sus peticiones a estos países, conociendo como conoce que de esta manera cabría esperar cambios positivos para la población afgana. Sabemos de conferencias y debates organizados con representantes menores de los Estados mencionados, pero no de medidas políticas reales. En lugar de combatir el cáncer de la injerencia, España ha contribuido a su metástasis en Afganistán, al apoyar a dirigentes con ingentes milicias privadas paraestatales a sus órdenes y con un pasado formidable como criminales de guerra.

**7) La cooperación al desarrollo oficial española terminará con la presencia militar.** O incluso antes. Aparte de lo comentado en el punto tercero y de que España desaconsejara, durante años, la cooperación directa de ONG españolas en Afganistán, el propio Plan Anual

de Cooperación Internacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha declarado que "ya han finalizado los proyectos bilaterales, manteniéndose únicamente labores de justificación y evaluación. En el caso de Afganistán, la Cooperación Española estará presente en el país vía cooperación multilateral hasta 2015". Sin soldados, por tanto, no hay ayuda.

**8) Es más que dudoso que España termine su presencia militar en Afganistán en 2014.** Las mismas razones que motivaron Libertad Duradera y la ISAF probablemente justificarán la participación en la nueva misión de la OTAN, denominada Resolute Support (*apoyo decidido*). De hecho, por las referencias en la web del Ministerio de Defensa se adivina que este apoyo ya está, en efecto, *decidido*.

**9) Las mujeres y las niñas afganas continúan sin ser 'liberadas'.** Por un lado, las prácticas desastrosas de los talibanes no eran mucho peores que las de sus predecesores, muchos de ellos los mismos que les han sucedido en el poder. En segundo lugar, las continuas referencias a la situación de las afganas en el Parlamento español parecieron obviar que la fuente principal de sus problemas se encuentra en su propio entorno familiar y social. Parece plausible inferir que esas prácticas han estado agravadas en extremo por los miedos, retrocesos y conservadurismos asociados a tres décadas de guerra. Por otro lado, mejorar la situación de la mujer no ha sido en absoluto un objetivo primario de las intervenciones militares en Afganistán. No sería prudente, sin embargo, ningunear que algunas agencias y organizaciones locales e internacionales han trabajado para ellas, con avances muy limitados pero importantes. Las afganas han ganado en derechos oficiales y en opciones de acceso teórico a la educación. La materialización práctica de esos derechos y su estabilidad, no obstante, es harina de otro costal.

**10) ¿Es Afganistán, en todo caso, un mejor lugar para vivir para su población que hace trece años?** No resulta fácil responder a esta pregunta, pero podemos convenir que todo dependerá de cuál sea el criterio utilizado. Por un lado, parece evidente que muchos afganos están mejor: entre otros, aquellos que han mejorado su ingreso gracias al aumento de opciones laborales que ha supuesto la presen-

cia extranjera y la dinamización de la economía; aquellos relacionados con la provisión de servicios de seguridad, la denominada "reconstrucción" o el negocio de narcóticos; o aquellos grupos de población que quedaron peor parados por el régimen talibán. Por el otro, cabe destacar que hoy muchas otras personas padecen una mayor inseguridad, en Afganistán como en otros lugares del mundo. En lugar de listar aquí las consecuencias negativas de la intervención militar, entre las que destacan sobremanera miles de muertos civiles, muchos de ellos directamente por las fuerzas extranjeras, resolveremos que el esfuerzo internacional no ha mejorado la situación como debiera. En absoluto. Así, considerando exclusivamente los costes de Libertad Duradera y la ISAF, el mundo ha destinado a Afganistán el equivalente a entre 300 y 400 veces el PIB que tenía este país en 2001. Además, este país ha recibido desde 2001 otras 20 veces su PIB de ese año en concepto de ayuda internacional al desarrollo. Si la mejora para su población no ha sido "proporcional" (recordemos, por ejemplo, que tiene de larguísimo la mayor mortalidad materna del continente) es, sobre todo, porque los objetivos eran otros.

La intervención militar en Afganistán no se explica en clave afgana, sino a través de la conmovión en EE UU por los atentados del 11-S y las oportunidades geopolíticas y geoeconómicas

derivadas. A pesar de la retórica utilizada por el gobierno español, los afganos y las afganas no han representado, en el mejor de los casos, más que una motivación muy secundaria. No se pretende descartar aquí que una parte de los 20.000 soldados españoles que han pasado por allí pretendiera efectivamente mejorar la suerte de esa población. Sobre eso, poco conocemos. Pero es la esencia de la intervención militar, no las motivaciones individuales, lo que se pretende poner en tela de juicio. Lo sucedido en Afganistán escenifica la instrumentalización de los ejércitos para conseguir objetivos de política exterior, de promover los propios intereses a costa, si es preciso, de las necesidades ajenas. Sin lugar a dudas, convenía, antes como ahora, trabajar en pro de un mejor Afganistán, pero entre el ninguno y silencio atronadores que caracterizaron a las relaciones bilaterales entre España y Afganistán antes de 2001 y las maneras militaristas y de connivencia con EE UU que les sucedieron existe un abanico de opciones que no se ha querido explorar, entre las que destaca la cooperación entre las respectivas sociedades civiles y la diplomacia destinada a reducir la injerencia extranjera, a dejar de utilizar Afganistán como un gran tablero de juegos de geopolítica. Temámoslo, a España no le interesa ninguna de esas opciones intermedias, y a esta mirada cortoplacista militarista seguirán las voces de quienes claman que allí no se nos ha perdido nada.

Alejandro Pozo

JUSTÍCIA I PAU  
CENTRE DELÀS  
D'ESTUDIS  
PER LA PAU

JP  
JUSTÍCIA I PAU

Equipo de redacción: Jordi Calvo y Pere Ortega.

Han colaborado en este número: Blanca Camps-Febrer, Eduardo Melero, Jordi Calvo Rufanges y Alejandro Pozo.

D.L.: B-19576-2010 - ISSN edición impresa: 2013-813X - ISSN edición en línea: 2013-9764

ACD Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament



## CÓMO COLABORAR

- Forma parte de nuestro equipo de investigación.
- Ayúdanos en tareas de comunicación, gestión y campañas.
- Haz las prácticas de tus estudios en nuestro Centro.
- Hazte socio/a llamando al 93 317 61 77 o desde nuestra web: [www.centredelas.org](http://www.centredelas.org)

Recuerda que tus aportaciones son fiscalmente deducibles en un 25%.

CENTRE DELÀS D'ESTUDIS PER LA PAU – JUSTÍCIA I PAU · Roger de Llúria 126, 3er 1a · 08037 Barcelona  
T. 93 317 61 77 · F. 93 412 53 84 · [www.centredelas.org](http://www.centredelas.org) · [info@centredelas.org](mailto:info@centredelas.org)